

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Hernando Rojas Rojas
DEMANDADO	AFP Porvenir S.A. y Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 023 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 023 2020 00142 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 159 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Ineficacia de traslado afiliado
DECISIÓN	Confirma

En la fecha, **dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la **AFP Porvenir S.A.**, y el grado especial de consulta para **Colpensiones**, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Hernando Rojas Rojas**. Radicado único nacional 05001 3105 **023 2020 00142** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **20**, que se plasma a continuación:

Antecedentes

Para lo que interesa se tiene que el demandante ruega declarar la ineficacia, o en subsidio la nulidad de su afiliación a la AFP Porvenir S.A., y se le tenga siempre inmerso en el RPMPD, ordenándose a Colpensiones su reincorporación, y a la AFP la restitución de los aportes recibidos. Pide también condena en costas.

En sustento de ello afirma que, **nació el 18 de julio de 1959**, entre el 1º de abril de 1981 y el 30 de noviembre de 1996 cotizó al ISS; en el mes de noviembre de esta última anualidad, con la aquiescencia de su empleador, una asesora de Porvenir dio una charla grupal, explicando las virtudes de pertenecer a esa administradora, entre ellas, la posibilidad de una pensión anticipada, de disfrutar de excedentes y de la heredabilidad del capital ahorrado, sin que se le ilustrara de manera detallada de las consecuencias que aparejaba tal movilidad, tampoco se le enseñó cómo funcionaba el RAIS, ni las condiciones para acceder a la pensión, omitiéndose igualmente la realización de proyecciones. Agrega que no se le escuchó en dudas racionales, ni se le dio espacio para consultar, limitándose a exponer las virtudes del fondo privado y la inminente extinción del ISS, deviniendo ineficaz tal afiliación. Puntualiza que para el 2019 percibía un salario de **\$5.044.630**; el 03 de junio de 2020 presentó a Colpensiones petición de retorno al régimen público, resuelta de manera negativa.

En auto del **25 de septiembre de 2020**, se admitió y dar trámite a la acción, enteradas de la actuación, las entidades vinculadas por pasiva allegaron escritos de contestación, así:

AFP Porvenir S.A., frente a los hechos manifiesta que no son ciertos o no le constan. La edad por ser asunto personalísimo que requiere prueba solemne, y la vinculación al RPM por haberse dado en una entidad ajena a esa sociedad. Explica que, *realizó diversas estrategias comerciales con el objetivo de brindar información oportuna, clara, suficiente, concreta, adecuada y veraz respecto de*

las características del RAIS, para que el potencial afiliado tomara una decisión informada. Reiterando que brindó la información clara, suficiente y veraz acorde a los datos suministrados por la parte accionante y en cumplimiento de las obligaciones vigentes. Resistió las pretensiones y formuló las excepciones de: prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

Colpensiones. Tiene como cierta la fecha de nacimiento del demandante por acreditarse con copia de cédula de ciudadanía, también la solicitud de retorno al régimen público y la respuesta negativa, los demás supuestos no son ciertos o le corresponde a la parte que los alega probarlos. **Negó** las pretensiones y formuló **las excepciones** de: inexistencia de nulidad y/o ineficacia en el traslado de régimen, saneamiento de la nulidad relativa alegada por la parte demandada aduciendo inducción a error, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas y la innominada.

La primera instancia culminó con **sentencia** proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito el 21 de junio del año en curso, declarando **ineficaz** el traslado de **Hernando Rojas Rojas** del RPM al RAIS, y por tanto que la afiliación al primero no ha tenido solución de continuidad en el tiempo. Condenó a **Porvenir S.A.**, a que dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, retorne a Colpensiones, *el valor de la cuenta de ahorro individual que **HERNANDO ROJAS ROJAS** tenga acreditada, junto con los rendimientos financieros, pero además también, en ese mismo término, trasladar las cuotas de administración, las primas previsionales y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, indexados estos tres últimos rubros.* Advirtió que Porvenir debe adjuntar relación de conceptos, con detalle pormenorizado de valores, IBC y demás información relevante. Condenó a Colpensiones a recibir de Porvenir los montos que se ordena devolver y actualizar la historia laboral del actor. Declaró no probadas las excepciones y gravó con costas a la AFP, fijando el monto de las agencias en derecho.

Argumentó el fallador que, bajo las premisas normativas y alcance de la línea jurisprudencial, coherente y sólida de la Sala de Casación Laboral frente al tema de la ineficacia, para el caso la AFP no acreditó el cumplimiento del deber de información calificada, completa, suficiente, idónea y comprensible, de acuerdo a la etapa en que se estaba, sin que dicho deber se entienda satisfecho con la suscripción libre y voluntaria del formulario; en consecuencia, le impuso al acto de traslado del RPMPD al RAIS la sanción de ineficacia, con las restituciones y consecuencias indicadas.

El **recurso de apelación** fue interpuesto por la apoderada de la **AFP Porvenir S.A.**, peticionando la revocatoria total del pronunciamiento, pues el demandante tuvo acceso a los asesores comerciales, manifestando que se le brindó información relacionada con el RAIS, por lo que no es procedente la ineficacia de la afiliación, conoció las ventajas del régimen privado, y de forma libre y voluntaria decidió su movilidad, permaneciendo durante largo tiempo, lo que debe entenderse como ratificación. Obra en el expediente formulario que da cuenta de la voluntariedad y conciencia del cambio, documento revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera, además de ser el único requisito exigido, más la información verbal. En cuanto a la prueba documental extrañada, insiste que solo se exigía el formulario, luego no puede obligarse al fondo a aportar otra distinta, dado que no se requería soporte escrito y no puede forzarse a lo imposible. Adicional Porvenir hace campañas masivas para informar a los afiliados de los cambios normativos y pone a su disposición diversos canales de comunicación.

Para la profesional también debe revocarse la condena a retornar todos los dineros por motivo de la afiliación, y si se deja en firme la ineficacia, se exonere de la restitución de las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes a garantía de pensión mínima debidamente indexados, pues las primeras son emolumentos que se descuentan para para gestionar los recursos, y tienen sustento legal, y el seguro previsional fue

destinado a un tercero, aseguradora, por lo que no está en poder de Porvenir, cubriéndose los riesgos de invalidez y muerte; y la indexación es una doble condena al obtenerse rendimientos que compensan el poder adquisitivo. Tampoco procede la condena en costas, por ser el actuar de la AFP de buena fe y con apego a la ley.

En favor de Colpensiones se conoce en el grado jurisdiccional de consulta.

De la etapa de alegaciones ante esta instancia las apoderadas de la pasiva hicieron uso, así:

Colpensiones insiste en los argumentos en que sustenta su defensa en sus distintas intervenciones, y pone de presente el contenido del artículo 48 Superior en lo atinente al principio de sostenibilidad financiera, destacando que la AFP entregó la información exigida por la normativa vigente para la fecha de suscripción del formulario. En caso de ratificarse el veredicto de primer grado ruega tener en cuenta que la entidad es un tercero ajeno al contrato entre el fondo y el afiliado por lo que debe mantenerse la orden de devolución de todos los conceptos con el archivo plano para el cargue de la información y exonerársele de condena en costas.

AFP Porvenir S.A., transcribe la parte resolutive de la sentencia, precisando y ampliando la argumentación frente a los puntos materia de inconformidad, esto es, **1.** Declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, pues no existen razones fácticas ni jurídicas para ello, reiterando la debida observancia de la legislación vigente frente al deber de información; **2.** La orden de reintegrar a Colpensiones el capital que tenga la demandante en la CAI, con los rendimientos, incluyendo cuotas de administración, las primas previsionales y lo descontado para el FGPM, estos últimos tres rubros indexados, pues estos conceptos tienen fundamento legal y destinación específica, cumpliendo con la debida administración de recursos y la

cobertura de los riesgos de invalidez y muerte. Y **3.** La condena en costas que debe ser levantada por su actuar de buena fe y ajustado al ordenamiento jurídico.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Como hechos debidamente acreditados se tienen: la fecha de nacimiento del demandante, el **18 de julio de 1959**, su vinculación al RPM el 01 de abril de 1981, cotizando hasta el 30 de noviembre de 1996 un total de 783,86 semanas, (**785** según historia laboral adjunta al escrito de demanda, generada por la AFP accionada el 15 de enero de 2020 y con la adosada al escrito de contestación por esta entidad, generada el 16 de octubre de 2020); su traslado al RAIS – **Porvenir S.A.**, con formulario suscrito el 19 de noviembre de 1996, efectividad a partir del 01 de enero de 1997, documento en que se dejó constancia de aportes a otra entidad por más de 150 semanas al ISS.

De acuerdo con el recuento realizado, los argumentos de la apelación y el grado jurisdiccional de consulta para Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si hay lugar a la declaratoria de ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS a través de **Porvenir S.A.** y como consecuencia de ello, a su inmersión automática en el RPM, con las correspondientes restituciones económicas, los conceptos que estas comprenden, si se debe ordenar o no su actualización mediante el mecanismo de la indexación y lo atinente a la condena en costas.

Pues bien. Reiterada ha sido la línea de la jurisprudencia **mayoritaria** de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, en torno al tema de la carencia de efectos jurídicos del traslado de régimen

pensional cuando no está precedido de una suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna información sobre las reales implicaciones de abandonar el régimen de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras, existiendo unas reglas decantadas, entre ellas, que la movilidad debe estar precedida de la debida información y transparencia, **para el caso concreto, como el formulario se suscribió en noviembre de 1996**, se estaba en la primera etapa de la regulación normativa, contenida entre otras en los arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, art. 97, numeral 1° del Decreto 663 de 1993, disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal, y por tanto, el contenido mínimo estaba circunscrito a la **ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales**, y suponía el análisis de la situación particular de cada afiliado ante el sistema; sin que obre prueba de que la AFP hubiere enseñado el funcionamiento y diferencias entre ambos regímenes, ventajas, desventajas, forma de liquidar y modalidades de pensión en el RAIS, bajo las reglas de la normatividad vigente para tal calenda, ni del debido acompañamiento durante el tiempo en que ha estado allí, lo que se infiere incluso del escrito de contestación en que se manifiesta que **no le consta la fecha de nacimiento, ni la pertenencia al RPM por estar administrado por otra entidad**, a pesar del **cúmulo de semanas contabilizadas en la historia laboral, aportada por la misma sociedad, 785 en el ISS**, datos necesarios para cualquier análisis particular.

Y es que ha sido repetida la jurisprudencia especializada en explicar, ver entre otras, sentencia **STL4400-2022**:

*En efecto, esta Sala en reiterada jurisprudencia ha dejado clara su postura, al indicar que **la elección de cualquiera de los dos regímenes pensionales existentes debe estar precedida de una decisión libre y voluntaria, de suerte que las Administradoras de Pensiones tienen el deber de brindar a sus afiliados, una asesoría que les permita tener los elementos de juicio suficientes, para advertir la trascendencia de la decisión tomada al***

momento del traslado, sin importar si la persona es o no beneficiaria del régimen de transición, si tiene o no un derecho consolidado, o si está próxima a pensionarse.

*De ahí que, sea importante traer a colación la **sentencia CSJ SL1452-2019**, en la que se reiteró otros pronunciamientos en igual sentido, proveído en que se hizo un análisis exhaustivo respecto de la ineficacia de los traslados de regímenes pensionales en lo atinente a los siguientes aspectos, los cuales se han venido replicando en diversas sentencias de esta Sala:*

(1) [L]a obligación relativa al deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, y (2) si para dar por satisfecho ese deber, es suficiente con diligenciar el formato de afiliación. Así mismo, (3) determinará quién tiene la carga de la prueba en estos eventos, y (4) si la ineficacia de la afiliación solo tiene cabida cuando el afiliado tiene una expectativa de pensión o un derecho causado.

Así, en cuanto al primer punto, es decir, al deber de información a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones, la Sala advirtió que:

«... desde hace más de 10 años, la jurisprudencia del trabajo ha considerado que, dada la doble calidad de las AFP de sociedades de servicios financieros y entidades de la seguridad social, el cumplimiento de este deber es mucho más riguroso que el que podía exigirse a otra entidad financiera, pues de su ejercicio dependen caros intereses sociales, como son la protección de la vejez, de la invalidez y de la muerte. De allí que estas entidades, en función de sus fines y compromisos sociales, deban ser un ejemplo de comportamiento y dar confianza a los ciudadanos de quienes reciben sus ahorros, actuar de buena fe, con transparencia y «formadas en la ética del servicio público» (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008)».

Para finalmente, concluir que:

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Por ello, en el caso bajo examen le asiste razón a la recurrente, dado que el Tribunal, al concentrarse exclusivamente en la validez formal del formulario de afiliación, omitió indagar, según las normas vigentes a

1995, fecha del traslado, si la administradora dio efectivo cumplimiento al deber de brindar información suficiente, objetiva y clara sobre las consecuencias del traslado.

Respecto al segundo punto, se definió que, **el simple consentimiento expresado en el formulario de afiliación resulta insuficiente, pues existe la obligatoriedad de un consentimiento informado**, en tanto que:

«la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado (...) De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado».

Frente al punto tercero, referente a **la carga de la prueba**, se expuso que:

«el artículo 1604 del Código Civil establece que "la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo", de lo que se sigue que es al fondo de pensiones al que corresponde acreditar la realización de todas las actuaciones necesarias a fin de que el afiliado conociera las implicaciones del traslado de régimen pensional. (...) Paralelamente, no puede pasar desapercibido que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia, en virtud de la cual no es dable exigir a quien está en una posición probatoria complicada –cuando no imposible- o de desventaja, el esclarecimiento de hechos que la otra parte está en mejor posición de ilustrar. En este caso, pedir al afiliado una prueba de este alcance es un despropósito, en la medida que (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuarse el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que (iii) es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento». (Subrayado fuera de texto).

Finalmente, **en lo que corresponde al cuarto ítem**, respecto de que solo es procedente la ineficacia del traslado cuando el afiliado tiene el derecho causado o es beneficiario del régimen de transición, se precisó que: *«[t]al argumento es equivocado, puesto que ni la legislación ni la jurisprudencia tiene establecido que se debe contar con una suerte de expectativa pensional o derecho causado para que proceda la ineficacia del traslado a una AFP por incumplimiento del deber de información».*

De ahí que, anotó:

«De hecho, la regla jurisprudencial identificable en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008 y CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, así como en las proferidas a la fecha CSJ SL12136-2014, CSJ SL19447-2017, CSJ SL4964-2018 y CSJ SL4689-2018, es que las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado.

Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto». **Destacado fuera del texto.**

Y tampoco es posible afirmar que al ser el sistema de pensiones de carácter público toda su regulación es legal y por ser así se presume su conocimiento por los afiliados. Sobre el particular la SL1197-2021, señala:

*Así lo es, pues **en su disertación llega al punto de postular que era la accionante la que debía tener conocimiento de aquellos presupuestos**, contrario a ello, debió el Colegiado considerar que el deber de información debió ser veraz, oportuno e insoslayable en este campo de la seguridad social. **Las AFP tienen la imperativa obligación de brindar una asesoría suficiente, y por ello, si el afiliado alega que no fue así, como aquí ocurrió, el Tribunal debía entonces contraer su atención en elucidar si ese deber se satisfizo o no, con pruebas que lo demuestren de forma contundente, más aún, si aquella está, tal y como se indicó en el precedente transcrito, en mejor posición que los afiliados, para demostrar esas circunstancias.*** Negritas extra texto.

Sobre las proyecciones pensionales, en pronunciamiento SL4322-2022, se dice:

... que para la época en que el demandante se trasladó, la selección del régimen pensional no tenía relación con el monto de la pensión, pues lo que se espera al momento del traslado no es precisamente que se le informe el valor futuro de la prestación, sino que se le explique que aquella depende del capital acumulado en la cuenta individual, por lo que, las AFP como expertas en el aseguramiento de los riesgos de invalidez, vejez y muerte, cuentan con los soportes técnicos, estadísticos y actuariales para realizar proyecciones del capital que en el tiempo puede acumular el afiliado para acceder a su derecho pensional, teniendo

en cuenta las condiciones particulares de cada uno al momento del traslado, como la edad, sexo, nivel de ingreso, persistencia en la cotización, etc.; información con que cuenta la AFP por encontrarse registrada en el formulario de afiliación y en la historia laboral del afiliado.

*Así mismo, advierte el juzgador de alzada que la solicitud del demandante de retornar a Colpensiones no se realizó dentro de los plazos previstos, según las sentencias de la Corte Constitucional que citó en la providencia; **sin embargo, resultaría ser un desaguísado centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Horizonte hoy Porvenir SA, con lo cual, se desdibujaría por parte del Colegiado de instancia el pedimento efectuado desde el escrito inaugural (CSJ SL1475-2021).*** Negrillas intencionales.

Ni se pueden invocar actos de relacionamiento como sustento de saneamiento, en la misma sentencia se dice sobre el particular:

De la misma manera, encuentra la Sala que tampoco le asistió la razón al Tribunal al sostener que actos posteriores al traslado de régimen pensional efectuado en el año 2000, de aparente asentimiento con el RAIS, o las calidades personales o profesionales del demandante acumulados a lo largo de su vida, per se, convalidaron de alguna manera el hecho de que al momento de la afiliación la AFP no cumplió con el deber que le competía, como se ha explicado a lo largo de esta providencia (CSJ SL 3349-2021).

Concluyéndose en providencia CSJ SL1442-2021 que memoró el fallo CSJ SL12136-2014, que la información precisa, es un elemento esencial para pregonar que hubo **libertad** en la toma de la decisión, lo cual supone, necesariamente, el conocimiento de las consecuencias positivas y negativas de su acogimiento, acarreando su inobservancia **la ineficacia del acto de traslado de régimen en los términos de los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que:**

... las cosas vuelven a su estado anterior, de manera que la administradora tiene que asumir los deterioros del bien administrado, pues la ineficacia se declara como consecuencia de la conducta del fondo, al haber incurrido en la omisión de brindar la información adecuada, oportuna y suficiente al afiliado, quien tenía derecho a recibirla, no de forma gratuita, sino con cargo a la comisión de administración de aportes obligatorios y

comisiones por buen desempeño que se descuentan de la cotización y de su ahorro, deducción autorizada por el artículo 104 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 53 de la Ley 1328 de 2009 y que permite el literal q) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, al disponer: Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente Ley.

Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020. Reiterada en la SL843-2022). Negrillas intencionales.

Por ser el precedente vigente, es el acogido por esta Sala de Decisión, **por lo que se confirma la declaratoria de ineficacia de la vinculación del demandante al RAIS.**

Sobre los rubros a devolver, su actualización mediante el mecanismo de la indexación, y **la obligación de la AFP de asumir lo descontado por gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima con su propio patrimonio**, surgen, entre otras, a partir de las sentencias **SL3202-2021, SL3706, SL3707, SL3708, SL3710, SL3349-2021, SL4803-2021, SL4609-2021** reiteradas, entre otras en las **SL755-2022, SL756-2022, SL843-2022, SL1019-2022, SL1055-2022, SL2484-2022, SL4322-2022 y SL554-2023**, sin que sea una decisión caprichosa, **pues como ya se advirtió se acata el precedente vertical reiterado en más de 3 providencias que constituyen doctrina probable.**

Desde este punto de vista, no se estaría generando enriquecimiento sin causa en favor de COLPENSIONES o del demandante, y tampoco doble

condena, ya que se trata de la reivindicación de unas sumas que integran la cotización y que deben dirigirse a la administradora a la que ha pertenecido siempre sin solución de continuidad, máxime que fue la conducta de las AFP la que generó la ineficacia aquí declarada.

Por lo que se **confirma** la sentencia revisada en cuanto ordenó a la **AFP Porvenir S.A.**, reintegrar a Colpensiones, además del saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, los valores descontados por **gastos de administración, seguros previsionales y porcentaje aplicado a garantía de pensión mínima, estos tres debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos**. Así mismo se avala lo resuelto en cuanto a que al momento de cumplirse la orden impartida en cuanto a restituciones, deberá remitirse a Colpensiones relación discriminada de los conceptos, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

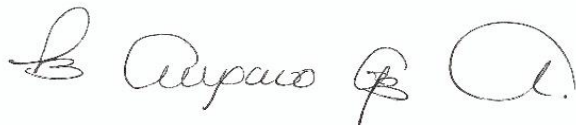
En relación con la **condena en costas**, en la que se incluyen las agencias en derecho, al ser una simple consecuencia procesal del ejercicio de la acción o de la excepción, se traduce en una obligación que se dirige contra el patrimonio de la parte vencida, que otorga a favor del vencedor un derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se ha visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019), resultando procedente **confirmar las de primer grado y por desatarse adversamente el recurso de apelación, se imponen también en esta instancia**. (art. 365-1 CGP), las agencias en derecho se fijan en la suma de \$1.160.000,00 a cargo de Porvenir S.A. y a favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Hernando Rojas Rojas**, contra la **AFP Porvenir S.A. y Colpensiones**.


Costas en esta instancia a cargo de la AFP Porvenir S.A., a quien se desata adversamente el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de **\$1.160.000,00 a favor del demandante**.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

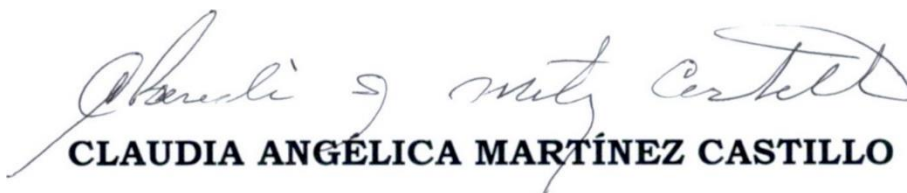
Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO